

INFORMARTIVO DE RELATORIA

OCTUBRE 2023

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Tercera</p> <p>C.P. Nicolás Yepes Corrales</p>	<p>Acción de Tutela</p> <p><u>11001-03-15-000-2023-01314-01</u></p> <p>Sentencia del 18 de agosto de 2023</p>

La Sección confirmó fallo de tutela proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales del accionante vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño al incurrir en un defecto fáctico y una decisión sin motivación al proferir la sentencia del 4 de noviembre de 2022 que revocó sentencia de primera instancia al tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. Adujo el Tribunal accionado que no se evidenció que el actor hubiera realizado actividades encaminadas a obtener una prórroga de la vigencia de la calificación de la Junta Médica Provisional, por lo cual, el paso del tiempo sí le fue imputable a él y sí generó la prescripción de su derecho.

Consideró la Sala que, en virtud del artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, el conteo de la prescripción de las mesadas no se debió hacer de manera retroactiva sino desde el 18 de noviembre de 2016, al ser en esa data en la que se obtuvo la calificación definitiva de pérdida de capacidad laboral y se generó el derecho a reclamar la pensión por invalidez, al tratarse de un requisito necesario para que el accionante pudiera acceder al reconocimiento de una pensión de invalidez y que luego de contar con esa determinación corre el termino de prescripción de 3 años.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala Plena de lo Contencioso Administrativo</p> <p>C.P. Oswaldo Giraldo López</p> <p>Auto de Unificación</p>	<p>Ejecutivo</p> <p><u>11001-03-15-000-2023-00857-00</u></p> <p>Auto del 12 de septiembre de 2023</p>

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo profirió auto de unificación pronunciándose sobre la admisión de un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada en un proceso ejecutivo.

Consideró que, el Código General del Proceso no regula lo concerniente a la sustentación del recurso en primera instancia, siendo imposible remitirse a este artículo para efectos de determinar el trámite que debe darse a la apelación, debiendo aplicarse el artículo 247 del CPACA al establecer de manera clara que el recurso debe sustentarse en la primera instancia.

Así, la Corporación, determinó como regla de unificación que, el régimen aplicable para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sentencia de unificación SUJ-031-CE-S2-2023	Nulidad y Restablecimiento del Derecho <u>25000-23-42-000-2013-00545-01</u> <u>(1798-2015)</u> Sentencia del 28 de septiembre de 2023
<p>La Sección profirió sentencia de unificación en lo que respecta a la vigencia del artículo 147 de la ley 100 de 1993 que regula la «garantía de pensión mínima para desmovilizados», considerando que, se trata de una pensión que hace parte del Sistema General de Pensiones, de la estructura normativa del subsistema denominado Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que se trate de un régimen especial de pensiones con regulación propia ni haya perdido vigencia con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005 en virtud del artículo 9 de la ley 153 de 1887, ni desconoce el principio de sostenibilidad financiera por tratarse de una medida necesaria en favor de un grupo determinado de la población vulnerable y marginado como los desmovilizados.</p> <p>Fijó como regla la siguiente:</p> <p><i>"El artículo 147 de la Ley 100 de 1993 regula una pensión especial de vejez que hace parte del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por lo que difiere de un régimen especial. Por tanto, permanece vigente pues no fue derogado por el Acto Legislativo 1 de 2005 y es aplicable a quienes se desmovilizaron o se desmovilicen de forma colectiva en el marco de un proceso de paz celebrado entre el gobierno nacional y los grupos armados ilegales, en los casos autorizados por la ley.</i></p> <p><i>Para tales efectos, las desmovilizaciones colectivas pudieron darse antes o después de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993."</i></p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. César Palomino Cortés	Ejecutivo <u>68001-23-33-000-2010-00119-01</u> <u>(1226-2019)</u> Sentencia del 2 de marzo de 2023
<p>La Sección al resolver recurso de apelación contra sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró no probada la excepción de pago total de la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución contra la entidad demandada, consideró que el informe técnico rendido por contador de Tribunal no corresponde a un dictamen pericial, sino que adquiere valor de prueba sumaria. Por lo que debe ser apreciada junto con los demás medios probatorios a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, al constituir un importante instrumento de apoyo para llevar al convencimiento del juez contencioso.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A C.P. Jorge Iván Duque	Nulidad y Restablecimiento del Derecho 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019) Sentencia del 3 de agosto de 2023
<p>La Sección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda ordenando el reconocimiento de retroactivo pensional desde la fecha de desvinculación del servicio público del demandante.</p> <p>Adujo la Sala que, no era viable para la entidad demandada acudir a los preceptos del Decreto 758 de 1990 ni de la ley 71 de 1988, para exigirle al accionante que se desafilie del sistema a fin de que fuera otorgado su derecho, sino que debía hacerse bajo los postulados de la ley 33 de 1985, que solo exige para la causación del derecho, el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo laborado, demostrando el retiro definitivo del servicio oficial.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A C.P. Gabriel Valbuena Hernández	Ejecutivo 25000-23-42-000-2018-01282-01 (3600-2021) Sentencia del 27 de julio de 2023
<p>La Subsección al resolver recurso de apelación contra providencia que declaró no probada las excepciones de caducidad y pago, negó la pretensión de indexación de intereses moratorios y ordenó seguir adelante con la ejecución en el proceso ejecutivo de la referencia; consideró que a efectos de verificar si ocurrió el fenómeno de la caducidad debe establecerse en primer lugar la norma aplicable al caso, la fecha de exigibilidad del título ejecutivo y determinarse si se cumplen los plazos establecidos en la norma según el tipo de obligación cuyo cumplimiento se persigue.</p> <p>Así, determinó que, cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el término para solicitar su ejecución es de cinco años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A C.P. María Adriana Marín	Reparación Directa 23001-23-33-000-2016-00022-01 (67.752) Sentencia del 4 de septiembre de 2023
<p>La Subsección modificó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con la que se solicitó declarar la responsabilidad de la Rama Judicial al haber incurrido en error jurisdiccional por el actuar de los Juzgados Promiscuo Municipal de San Antero y Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica al conceder un amparo constitucional a favor de uno de sus ex empleados, disponer el embargo de sus cuentas bancarias y ordenar pagarle emolumentos laborales dejados de percibir. La acción de tutela fue resuelta definitivamente en sentencia de la Corte Constitucional SU-377 de 2014, revocando las medidas de protección dictadas, dejó sin efectos los fallos de instancia, y declaró improcedente la solicitud de amparo.</p> <p>Consideró la Sala que, las actuaciones de los Juzgados constituyeron falla del servicio, dado que, a través del ejercicio irregular, arbitrario y erróneo de la acción de tutela desconocieron la realidad fáctica y jurídica del asunto puesto a su consideración, en torno a lo relacionado a la subsidiariedad.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas	Reparación Directa 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052) Sentencia del 8 de agosto de 2023
<p>La Subsección confirmó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con la que se solicitó condena por las secuelas ocasionadas al demandante por disparo con arma de fuego por parte de integrante de la Policía Nacional, cuando aquel se desplazaba en motocicleta e hizo caso omiso a señal de pare y huyó al pasar por un puesto de patrullaje, registro y control.</p> <p>Consideró la Sala que, el hecho dañoso se produjo por el uso excesivo de la fuerza de un agente de policía en el curso del operativo de patrullaje, registro, control e identificación de personas y motocicletas, en el que resultó afectada la integridad del demandante, sin que la huida justificara una agresión de tal magnitud. Máxime que, con dicho comportamiento no estaba atentando contra un bien jurídico de igual dimensión, como lo era su vida e integridad personal, razón por la que tampoco podía dársele cabida una hipótesis de culpa compartida o concurrente.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p align="center">Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A C.P. Marta Nubia Velásquez Rico</p>	<p align="center">Reparación Directa</p> <p align="center"><u>15001-23-31-002-2011-00491-01</u> <u>(62.178)</u></p> <p align="center">Sentencia del 22 de agosto de 2023</p>
<p>La Subsección al conocer de recurso de apelación, revocó sentencia del 23 de mayo de 2018 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda con la que se pretendía la declaratoria de responsabilidad por privación injusta de la libertad.</p> <p>Consideró la Sala que, el fundamento por el cual, el a quo negó las pretensiones de la demanda quedó sin fundamento, dado que no se configuró el eximente de culpa exclusiva de la víctima.</p> <p>Adujo que, la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación no fue justificada con el requisito de necesidad, además de que adelantó una investigación que concluyó con la preclusión por atipicidad de la conducta, por tratarse de actuaciones por parte de los actores, que giraron en torno al incumplimiento de una promesa de compraventa, que no constituyen los delitos que les fueron endilgados.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p align="center">Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil</p> <p align="center">C.P. Ana María Charry Gaitán</p>	<p align="center">Conflicto Negativo de Competencias Administrativas</p> <p align="center"><u>11001-03-06-000-2022-00213-00</u></p> <p align="center">Sentencia del 28 de julio de 2023</p>
<p>La Sala estudió conflicto negativo de competencias administrativas entre la Secretaría de Educación Municipal de Pasto (Nariño), Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.) y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en torno a una solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora.</p> <p>Consideró la Corporación, tras analizar el artículo 56 de la ley 962 de 2005 y el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1272 de 2018, así como del artículo 57 de la ley 1955 de 2019; que en el caso concreto, tanto la Fiduprevisora S.A. como la Secretaría de Educación Municipal de Pasto son responsables de la mora en el pago de las cesantías, en forma proporcional al tiempo imputable a la demora en el trámite por parte de cada una, correspondiéndoles emitir respuesta de fondo ante la solicitud de reconocimiento de sanción moratoria.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<p align="center">Corte Constitucional</p> <p align="center">M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar</p>	<p align="center"><u>Sentencia T-290 del 2 de agosto de 2023</u></p>
<p>La Sala Cuarta de Revisión analizó dos tutelas presentadas por dos estudiantes de la Universidad de Pamplona, a quienes se les impuso como sanción la cancelación de la matrícula académica como resultado de procesos disciplinarios por su participación en protestas realizadas el 21 y 22 de noviembre de 2019 en el Municipio de Pamplona.</p> <p>En el primero de los casos, la Corte consideró que, las conductas descritas y la justificación del Comité Disciplinario no superaron las exigencias de motivación y congruencia al basarse en un hecho no probado. Y tras advertir diversas contradicciones, determinó que representan una vulneración del derecho al debido proceso del estudiante en el trámite disciplinario.</p> <p>Así, la Corte revocó los fallos de tutela proferidos respecto del primero de los casos, dejó sin efectos las decisiones del Comité Disciplinario de la Universidad de Pamplona y ordenó que emitiera nuevamente una decisión en el proceso disciplinario.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<p align="center">Corte Constitucional</p> <p align="center">M.P. Juan Carlos Cortés González</p>	<p align="center"><u>Sentencia T-225 del 21 de junio de 2023</u></p>
<p>La Sala Segunda de Revisión, conoció acción de tutela con la que se pretendía el amparo de los derechos a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital, por cuanto Colpensiones se negó a reconocerle pensión de sobrevivientes solicitada, aun cuando tenía la calidad de hijo en situación de discapacidad cognitiva y se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 70.25%.</p> <p>Consideró la Corte que, se presentaron por lo menos cuatro tipos de irregularidades, i) la exigencia de requisitos no contemplados en las normas vigentes y la imposición de barreras de acceso al servicio, ii) ausencia de valoración de las pruebas aportadas para acreditar la situación de discapacidad, iii) inconsistencias en la información brindada con respecto al dictamen de pérdida de capacidad laboral, iv) la excesiva tardanza para decidir sobre el reconocimiento del derecho pensional.</p> <p>Así, ordenó a Colpensiones que reconociera, liquidara y pagara la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho el accionante, en calidad de hijo en situación de discapacidad de su progenitora, así como el pago de las mesadas no prescritas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Paola Andrea Meneses	Sentencia T-366 del 14 de septiembre de 2023
<p>La Sala Séptima de Revisión conoció acción de tutela instaurada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por una auxiliar de enfermería a quien se le desconoció la existencia de un contrato laboral con el Hospital Militar Central bajo la modalidad de prestación de servicios.</p> <p>La Corte reprochó que la decisión del Tribunal se apartó de la jurisprudencia constitucional relacionada con las presunciones de subordinación y la inversión de la carga de la prueba en los casos en los que se discute una relación laboral entre un auxiliar de enfermería y una entidad pública prestadora del servicio de salud.</p> <p>Consideró también, que la entidad demandada no aportó pruebas que permitiera determinar la autonomía en la ejecución del contrato, sino que se limitó a informar que en su planta de personal no existía el cargo de auxiliar de enfermería.</p> <p>A partir de lo anterior, la Corte revocó las decisiones de instancia, amparó los derechos de la accionante y ordenó al Tribunal proferir una nueva decisión, de conformidad con las consideraciones consignadas en el fallo.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Alejandro Linares Cantillo	Sentencia C-387 del 04 de octubre de 2023 Comunicado No. 37
<p>La Corte declaró exequible el inciso 3º del artículo 35 del Decreto Ley 20 de 2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”.</p> <p>El problema jurídico planteado consistió en determinar, si el aparte demandado, al establecer que las listas de elegibles resultantes de los procesos de selección adelantados por la Fiscalía General de la Nación solo podían ser usadas para proveer las vacantes definitivas que se generen en los empleos inicialmente provistos por los concursos, y no para suplir vacantes preexistentes de los empleos ofertados pero que no fueron convocados, resultaba contrario al derecho de acceso al desempeño de cargos y funciones públicas.</p> <p>Concluyó la Corporación que, el alcance de las listas de elegibles en el sistema especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación no desconoce el derecho de acceso al desempeño de cargos públicos, ni el principio del mérito para el ingreso a empleos de carrera.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-276 del 26 de julio de 2023
<p>La Corte analizó acciones de tutelas con las que se invocaba el amparo de los derechos al trabajo, la salud, la igualdad, la dignidad humana, la estabilidad laboral y la seguridad social vulnerados por la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, luego de que los accionantes sufrieran accidentes que les generaron incapacidades en medio de su labor.</p> <p>La Sala de Revisión amparó sus derechos y recordó las reglas contempladas en las sentencias SU-087 de 2022 y SU-061 de 2023 sobre los principios constitucionales de igualdad y prohibición, solidaridad social e integración de las personas en situación en discapacidad con situaciones medicas complejas. Así mismo, que se predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada tanto de quienes tienen una pérdida de su capacidad laboral calificada como de aquellas que padecen una enfermedad o han sufrido accidentes con incapacidades prolongadas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán	STP8281-2023 Boletín Octubre 2023
<p>La Corte conoció de impugnación de acción de tutela interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación por inconformidad con la mora en investigación por punible de violencia intrafamiliar en la que la accionante funge como víctima.</p> <p>Consideró la Sala que, desde la presentación de la denuncia transcurrieron 4 años, 6 meses y 24 días, periodo que supera en más del doble del tiempo con que cuenta la Fiscalía para adoptar una decisión de fondo, sin que se pueda catalogar el tiempo como razonable, al haber desbordado ampliamente el periodo dispuesto por el legislador para la fase de investigación a cargo del acusador.</p> <p>Así mismo, adujo que, la autoridad judicial no explicó, ni justificó el tiempo transcurrido, sin que se evidenciara una circunstancia que eximiera de responsabilidad a la Fiscalía por el lapso transcurrido.</p> <p>En consecuencia, se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la actora, ordenando a la autoridad judicial accionada a que, en el término de tres (3) meses emitiera las decisiones a que hubiere lugar, ya sea formular acusación u ordenar el archivo de la indagación.</p>	